



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
ESTADO DE DERECHO EN HONDURAS**

**Informe sobre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Honduras**

Julio, 2005

Esta publicación fue elaborada para revisión de USAID. Fue preparada por el consultor Miguel Angel Montañes Pardo y presentada por el Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida

**Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en
Honduras**
Lomas de Mayab, Calle Xichel, casa No.3154
Tegucigalpa, Honduras

Tel: +(504) 239-0139
+(504) 239-0140
Fax: +(504) 232- 6332
Web: <http://caj.fiu.edu>

El Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras es financiado por USAID y administrado por el *Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida*

SUMARIO

Los puntos de vista del autor (res) expresados en esta publicación no reflejan necesariamente la opinión de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos ni la del gobierno de los Estados Unidos

I. INTRODUCCIÓN

II. SITUACIÓN ACTUAL

- 1. Registro de asuntos**
- 2. Tramitación procesal**
- 3. Sistema informático de gestión procesal de casos**
- 4. Secretaría y Oficina Judicial de la Sala Constitucional**
- 5. Letrados adscritos a los Magistrados**
- 6. Archivo Judicial**
- 7. Bases de datos de jurisprudencia constitucional**
- 8. Biblioteca y servicios de documentación**
- 9. Publicación de sentencias y resoluciones**

III. ACTUACIONES DE MEJORA QUE SE PROPONEN

- 1. Mejoras en el área jurisdiccional**
- 2. Mejoras en el área administrativa**
- 3. Programas de capacitación y formación en materia constitucional**
- 4. Desarrollo reglamentario de la Ley de Justicia Constitucional**

I. INTRODUCCIÓN

De conformidad con los términos de referencia del contrato de consultoría, las actuaciones desarrolladas por mi parte, en condición de consultor, han sido, en síntesis, las siguientes:

- Estudio y análisis del proyecto de Ley de Justicia Constitucional y de la vigente Ley de Amparo de Honduras.
- Distintas reuniones con los Magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional y con el consultor nacional Sr. Flores Valeriano, con asistencia de los Sres. Barrientos Pellicer y Cuellar Cruz en su condición de directivos del Proyecto CAJ-FIU.
- Reunión en Tegucigalpa con los Magistrados de las Cortes de Apelación de Tegucigalpa, Choluteca y Comayagua.
- Reunión en San Pedro Sula con los Magistrados de las Cortes de Apelación de Copán, La Ceiba, San Pedro Sula y Santa Barbara.
- Visita a las dependencias de la Sala de lo Constitucional, con reuniones de trabajo con los Letrados, Secretario en funciones,

Relatores y demás personal de la Sala, así como los responsables del Registro General de la Corte Suprema, Biblioteca y Archivo.

- Análisis y estudio de distinto material de trabajo facilitado por la Sala Constitucional (Disposiciones de Organización y Funcionamiento; informes de actividades; estadísticas; etc...).
- Elaborar un diagnóstico lo más exacto y actualizado posible de la situación de la Sala Constitucional de Honduras con vistas a la puesta en marcha, en su caso, de programas de mejora en el funcionamiento de la Sala Constitucional.

La actuación preliminar de estudio y análisis de de Ley de Justicia Constitucional y de la vigente Ley de Amparo de Honduras se hizo en Madrid (España), mientras que todas las demás actuaciones, a excepción de la redacción final del presente informe, se han llevado a cabo en Honduras, durante los días 20 a 24 de junio de 2005, conforme al programa organizado.

Como resultado del análisis realizado se eleva a la Dirección del Proyecto este informe, referido tanto a la situación actual como a las medidas que podrían adoptarse para la mejora y fortalecimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

II. SITUACIÓN ACTUAL

1. Registro de asuntos

La presentación de todo tipo de escritos dirigidos a la Sala Constitucional se hace a través del Registro General de la Corte Suprema de Justicia, en el que se anotan en un libro registro todos los escritos.

El Registro General, dependiente de la Secretaría General de la Corte Suprema, está informatizado, aunque con un programa obsoleto. En todo caso, están grabados en soporte informático –al parecer en sistema MS-Dos— todos los registros de los asuntos ingresados en la Sala Constitucional, así como también buena parte de la tramitación procesal posterior. Por ello, caso de implantarse un sistema informático de gestión de procesal integral, podría hacerse la migración de todos los datos obrantes al nuevo programa informático.

Según información facilitada por la Sala Constitucional, está previsto implantar un Registro propio de la Sala Constitucional, y a tal fin se estaban realizando, al tiempo de la visita a la sede de la Sala, las obras de acondicionamiento para poder llevarlo a cabo.

2. Tramitación procesal

La tramitación procesal está regulada, con carácter muy general, en la vigente Ley de Amparo de Honduras. Con mayor precisión, pero siempre de forma genérica, el proyecto de Ley de Justicia Constitucional regula la tramitación de los distintos recursos y procesos de los que conoce la Sala Constitucional.

Aparte lo anterior, existe un Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Sala Constitucional, aprobado en fecha 21 de marzo de 2002, en el que se establecen algunas normas de procedimiento interno de la Sala.

La tramitación procesal varía según el tipo de proceso (demandas de inconstitucionalidad, demandas de amparo, habeas hábeas, etc.), aunque en realidad se trata de tramitaciones muy parecidas, presididas todas ellas por los principios de celeridad procesal y sumariedad.

De la tramitación procesal llama la atención la inexistencia de un régimen de señalamientos y deliberación de los asuntos por la Sala, así como la previsión de que, en los casos en que no exista unanimidad en la Sala Constitucional, los asuntos pasen directamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, es preciso señalar que todas las resoluciones aparecen firmadas por todos los Magistrados y que corresponde al Secretario General dar fe del contenido de las actas del Pleno en el que se aprueben.

Por último, señalar que el art. 122 de la nueva Ley de Justicia Constitucional crea la Secretaría de la Sala Constitucional y se remite a un futuro “reglamento interno” para la determinación de su composición y funcionamiento. Pues bien, este Reglamento interno podría articularse como auténtico Reglamento de Organización y Funcionamiento, lo que permitiría una regulación más detallada de la tramitación y gestión procesal de los distintos causas de las que conoce la Sala Constitucional.

En todo caso, de estimarse procedente limitar el Reglamento interno previsto en el art. 122 de la Ley de Justicia Constitucional a aspectos puramente organizativos de la Secretaría General de la Sala, una vez entre en vigor la Ley de Justicia Constitucional deberá procederse a elaborar y aprobar unas nuevas Disposiciones de Organización y Funcionamiento de la Sala Constitucional, en sustitución de las ahora vigentes, que datan del año 2002 y que obviamente no se acomodan a las nuevas previsiones legales.

3. Sistema informático de gestión procesal de casos

No existe ningún sistema informático de gestión procesal de los recursos y procesos de los que conoce la Sala Constitucional. Además,

ninguna de las distintas áreas y dependencias de la Secretaría de la Sala examinadas disponen de aplicaciones informáticas propias de su cometido.

Como ya se apuntó en el apartado correspondiente al Registro de asuntos, sí están grabados en soporte informático los datos del registro inicial de los asuntos y parte de la tramitación procesal posterior, lo que, caso de implantarse un sistema informático de gestión de procesal integral, permitiría la migración de los datos obrantes al nuevo programa.

Sin embargo, en relación con este punto, es conveniente hacer algunas advertencias para comprender la envergadura y alcance que supondrá la implantación de un programa de gestión procesal:

- Inexistencia de red local.
- Algunos de los PCs e impresoras pueden resultar, por sus características técnicas, insuficientes para utilizar programas de gestión procesal y bases de datos jurisprudenciales.
- Escasez de equipos informáticos. En efecto, a excepción de los Magistrados y sus secretarías particulares, que disponen de ordenadores con acceso a Internet (en el caso de las secretarías particulares el acceso es limitado), apenas si existen otros equipos informáticos. En concreto, según información facilitada en la visita a las oficinas y dependencias de la Sala Constitucional, sólo existen tres ordenadores, uno asignado al Receptor Adscrito y otros dos para todos los Relatores.

4. Secretaría y Oficina Judicial de la Sala Constitucional

La estructura de la Secretaría y Oficina Judicial de la Sala Constitucional aparece reflejada en el Organigrama de Secretaría que se acompaña (Anexo núm. 1).

Al respecto cabe hacer las siguientes precisiones:

- A. La Secretaría General, cuya creación aparece en el art. 122 de la Ley de Justicia Constitucional, esta en fase preparatoria y en la actualidad existe un "Secretario en funciones", que hace las veces de Secretario General.
- B. Desde hace aproximadamente dos meses, existe una plaza de "Asesor", a quien le corresponde realizar el trámite de informe sobre la admisibilidad de los distintos recursos y procesos que se planteen ante la Sala Constitucional. Entre las funciones de este Asesor están las de elaborar los borradores de las resoluciones de inadmisión que se propongan.

- C. En la Secretaría de la Sala Constitucional existen cinco plazas de “Relatores”, cuya función principal es la elaboración de los Antecedentes de todas las resoluciones de la Sala Constitucional.
- D. La Secretaría de la Sala Constitucional se completa con ocho plazas de “Auxiliares”, que realizan exclusivamente funciones de secretaria y auxilio administrativo.
- E. Cada uno de los Magistrados de la Sala tiene adscrita una Secretaria, con funciones de secretaría particular y de despacho.

5. Letrados adscritos a los Magistrados

Desde hace poco más de un año (mes de mayo de 2004), cada uno de los Magistrados de la Sala Constitucional tiene asignados un Letrado, quien realiza las funciones propias de asesoramiento y colaboración con el Magistrado en materia jurídica.

Los Letrados tienen un régimen de contrato laboral, por periodo de un año, y son nombrados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

6. Archivo Judicial

Los expedientes de la Sala Constitucional forman parte del Archivo General de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, no existe un “archivo propio” de la Sala Constitucional.

En el Archivo General existen libros-registros en el que se reflejan tanto los préstamos como las devoluciones de los expedientes archivados.

En la actualidad, está en marcha un programa de modernización del Archivo General de la Corte auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en el marco del cual se está procediendo a la implantación de archivo en “cajas normalizadas”, ordenadas por año, mes y materia.

7. Bases de datos de jurisprudencia constitucional

No existe ninguna base de datos informática de la jurisprudencia constitucional. Sólo existe un sistema de archivo de resoluciones (documentos de texto archivados por tipo de proceso, mes y año), centralizado en el Centro de Documentación (CEDIJ), que se carga en algunos PCs y que utiliza el explorador de Windows como único motor de búsqueda.

La inexistencia de una auténtica base de de jurisprudencia constitucional supone una grave deficiencia del funcionamiento de la Sala

Constitucional. En primer lugar, porque la falta de sistematización de la jurisprudencia dificulta enormemente el manejo y aplicación de la doctrina constitucional por la propia Sala Constitucional, dificultades que se verán agrandadas en los próximos meses y años como consecuencia del incremento del número de resoluciones dictadas (Ver los informes y cuadros estadísticos de la Sala Constitucional, que se acompañan como Anexos, correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004, así como un avance del año 2005).

En segundo lugar, la inexistencia de una base de datos impide el conocimiento de la jurisprudencia constitucional por los ciudadanos en general y por operadores jurídicos en particular (jueces, abogados, profesores, etc...). Puede afirmarse, al respecto, que la jurisprudencia constitucional es prácticamente desconocida en Honduras, sobre todo teniendo en cuenta que – como después se expondrá—únicamente se publican en la Gaceta Judicial un número pequeño de resoluciones de la Sala Constitucional.

8. Biblioteca y servicios de documentación

La Sala Constitucional no dispone de biblioteca ni de servicios específicos de documentación, de tal forma que para las necesidades de información y documentación de los Magistrados, Letrados y demás personal al servicio de la Sala debe utilizarse la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco dispone de una Sección específica en Derecho Constitucional.

En las distintas reuniones de trabajo mantenidas, tanto los Magistrados y asesores de la Sala Constitucional como los Magistrados de las distintas Cortes de Apelación han puesto de manifiesto la escasa dotación de la Biblioteca y la falta de libros consulta en materia constitucional.

9. Publicación de las sentencias y resoluciones

A) Publicación en la Gaceta Judicial

Las sentencias y resoluciones dictadas por la Sala Constitucional se publican en la Gaceta Judicial, que depende del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ).

La Gaceta Judicial tiene una periodicidad mensual y se vende a un precio de 15 Lps, siendo repartida a todos los Jueces y Magistrados del país (al parecer se les descuenta de sus salarios el precio de la publicación). En la misma se publican sentencias y resoluciones de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia (Constitucional, Penal, Laboral, Contencioso-administrativo y Civil).

Ahora bien, no se publican todas las sentencias y resoluciones de la Sala Constitucional, sino únicamente una selección de las mismas. Así, por ejemplo, como botón de muestra, en la Gaceta Judicial correspondiente al mes

de mayo de 2004 (el núm. 5), se publican un total de doce resoluciones, de las cuales tres son de la Sala Constitucional y una de las publicadas aparentemente tiene escaso valor doctrinal, pues se trata de un expediente sobreesido por la Sala al haber cesado los efectos del acto recurrido (Expediente núm. AA 647-2004).

La insuficiencia de la publicación de las sentencias y resoluciones de la Sala Constitucional se pone aún más de manifiesto si se compara el número de resoluciones publicadas en el mes de mayo de 2004 (sólo tres resoluciones: un amparo administrativo y dos amparos penales) con el de resoluciones dictadas en el mismo periodo por la Sala, que, según los datos estadísticos de la propia Sala Constitucional, ascienden a un total de 91 resoluciones (55 sentencias en recurso de amparo; 17 en amparo en revisión; 1 en recurso de inconstitucionalidad; 1 en recurso de revisión; y 17 resoluciones diferentes en materia de amparo).

B) Publicación en el Diario Oficial

El artículo 316.2 de la Constitución de Honduras dispone que *“las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien la hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta”*.

Similar previsión contiene el artículo 94 de la nueva Ley de Justicia Constitucional (Decreto núm. 244/2003).

Pues bien, según información facilitada por la Sala Constitucional, en el único supuesto en que la Sala comunicó al Congreso Nacional una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de una Ley, para que procediera a su publicación, el Congreso no ha ordenado la correspondiente publicación en el Diario Oficial, y ello a pesar de la expresa previsión constitucional al respecto.

Se trata, sin duda, de una grave anomalía, que debería corregirse, incluso previendo de manera expresa en la Ley de Justicia Constitucional los términos y plazos de la publicación a fin de garantizar las previsiones constitucionales y legales al respecto.

III. ACTUACIONES DE MEJORA QUE SE PROPONEN

Tras el análisis realizado, se considera necesario la realización de programas de mejora en distintas áreas, necesidad que es compartida tanto por los Magistrados como por el personal asesor y funcionario de la Sala Constitucional.

Sin perjuicio de que la puesta en marcha de los distintos programas de mejoras exigirá, en su caso, un estudio más pormenorizado de cada una de

las diferentes áreas de actuación, a continuación se exponen de forma sistemática las grandes líneas de actuación que se sugieren.

1. Mejoras en el área jurisdiccional

En el área jurisdiccional, entendiendo ésta en su sentido más amplio, se proponen mejoras que afectan principalmente al ámbito de la jurisprudencia, mediante actuaciones diversas dirigidas a ampliar la publicación y conocimiento de las sentencias de de la Sala Constitucional.

En concreto, se sugiere la conveniencia de las siguientes actuaciones:

A. Publicación de las sentencias de la Sala de lo Constitucional en la Gaceta Judicial

Como ya se expuso anteriormente, las sentencias y resoluciones dictadas por la Sala Constitucional se publican en la Gaceta Judicial, que depende del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), pero se trata de una publicación parcial, ya que únicamente se publica una pequeña selección de las muchas resoluciones dictadas por la Sala Constitucional.

El sistema actual es claramente insuficiente, pues conduce a que la jurisprudencia de la Sala Constitucional sea prácticamente desconocida en Honduras. Sin embargo, cualquier modificación o cambio al respecto debe en cuenta que, en la actualidad, corresponde al CEDIJ el sistematizar y divulgar, en forma continua y actualizada, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para contribuir a la transparencia, la formación de doctrina y la seguridad jurídica del país, así como facilitar la consulta de autos acordados, circulares, leyes, reglamentos, documentos, bibliografía, estudios, estadísticas y otra información judicial de interés de las autoridades y personal institucional, de organismos especializados y de la colectividad.

La divulgación de la jurisprudencia de la Sala Constitucional puede conseguirse mejor por otras vías, como la consulta de la jurisprudencia en Internet y mediante la creación y difusión de una base de datos jurisprudencial en soporte informático (por ejemplo, en soporte CD o DVD), cuestiones éstas de las que se tratará en los dos siguientes apartados.

No obstante, también habría que estudiar la puesta en marcha de un programa de mejora de la difusión de la jurisprudencia constitucional en papel impreso, bien en la Gaceta Judicial (por ejemplo, publicando separadamente cuadernos de jurisprudencia constitucional), bien mediante la publicación de la doctrina constitucional debidamente sistematizada en una colección propia de la Sala Constitucional.

En relación con este concreto punto, parece igualmente necesario

determinar previamente a quien corresponde, en el ámbito de la Sala Constitucional, las funciones de recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional de la Sala.

Sin perjuicio de que la atribución de las funciones dependerá según el tipo de publicación de que se trate, se propone crear en la Secretaria General de la Sala Constitucional un “Servicio de Doctrina Constitucional”, que tenga como función principal la recopilación, clasificación y publicación a la doctrina constitucional (Ver el siguiente apartado 2, referido a Mejoras en el área administrativa).

B. Publicación en Internet de todas las sentencias y resoluciones dictadas por la Sala Constitucional

La Sala Constitucional no dispone de página web propia. La única información disponible es la que facilita la página web de la Corte Suprema (www.poderjudicial.gob.hn), información por lo demás escasa y poco útil (algunos de los apartados de la citada página web están siendo modificados y, por ello, la situación descrita podría cambiar a corto o medio plazo).

En este concreto punto, parece del todo imprescindible la mejora de la información en internet de la Sala Constitucional, bien mediante la creación de una página web propia, bien mediante el cambio de la página web de la Corte Suprema de Justicia.

Aparte de los cambios y mejoras que se estimen convenientes introducir en la página web, se considera necesario y urgente que en la misma puedan consultarse las sentencias y resoluciones de la Sala Constitucional (según la actual página web, está previsto un apartado de jurisprudencia a cargo del CEDIJ, aún en construcción).

Aunque lo ideal sería colgar en la página web toda la jurisprudencia constitucional debidamente sistematizada, con motor y campos de búsqueda definidos, podría estudiarse la posibilidad de empezar a publicar las nuevas sentencias, a texto completo, tan pronto se dicten a fin de no demorar en el tiempo la introducción de mejoras en este concreto apartado.

En otro orden de cosas, la página web (de la Corte Suprema o de la Sala Constitucional) debería contener una detallada información sobre las competencias de la Sala Constitucional y de los distintos procesos constitucionales, sobre todo con orientaciones claras, sencillas y precisas dirigidas a los ciudadanos sobre cómo y de qué forma pueden pedir a la Sala Constitucional la tutela de sus derechos constitucionales.

C. Elaboración de una base de datos sistematizada de la jurisprudencia constitucional

Teniendo en cuenta que no existe ninguna base de datos de jurisprudencia constitucional, resulta imprescindible hacer la clasificación y compilación de las resoluciones y jurisprudencia de la Sala Constitucional, así como su posterior difusión por medios impresos y electrónicos, con posibilidad de consulta por distintos campos de búsqueda (a través de un tesoro o voces; tipos de procesos; recurrente; disposición recurrida; texto libre, etc.).

Sin perjuicio de que la implantación de un sistema de gestión procesal integral de expedientes permitiría disponer en soporte informático de todas las resoluciones del Tribunal, parece conveniente separar, al menos para su manejo y consulta, los programas de gestión procesal (tramitación de los asuntos) de la consulta de jurisprudencia (texto completo de las resoluciones dictadas).

En relación con este concreto punto, me remito, para evitar reiteraciones innecesarias, a lo ya expuesto en el apartado anterior, sobre la conveniencia la creación y puesta en marcha, en el ámbito de la Secretaría General de la Sala Constitucional, de un Servicio de Doctrina Constitucional que se encargue de la sistematización y publicación de la jurisprudencia constitucional.

D. Fijación de un régimen de señalamiento y deliberación de la Sala Constitucional

En la actualidad no existe ninguna previsión normativa sobre el régimen de señalamiento de deliberación de los asuntos por la Sala Constitucional.

Este concreto tema podría regularse en el Reglamento de la Sala que se dicte en desarrollo de la Ley de Justicia Constitucional, o en su caso en las Disposiciones de organización y funcionamiento de la propia Sala.

E. Elaboración de un “Libro de Estilo” de la Sala Constitucional

El “Libro de Estilo” debería fijar los criterios y pautas sobre la forma y contenido de las sentencias y resoluciones de la Sala Constitucional, en aspectos tales como la redacción de Antecedentes y Fundamentos, las citas jurisprudenciales, forma de citar de las leyes y normas, etc.

2. Mejoras en el área administrativa

A. Sistema informático de gestión procesal

En el área administrativa y de la oficina judicial, se destaca la necesidad de elaboración y puesta en funcionamiento de un sistema informático de gestión procesal de casos, en el que queden registrados todos los tramites procesales de los distintos procesos constitucionales, desde su

ingreso en el Registro hasta la última resolución que se dicte.

La modernización informática y la puesta en marcha de un programa informático de gestión procesal deben contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

- La homologación de los procedimientos de tramitación de los expedientes jurisdiccionales del Tribunal.
- El establecimiento de un sistema en red para el control uniforme de la gestión.
- Facilitar a los usuarios internos del TC y al público en general el acceso inmediato y transparente a información sobre el estado en que se encuentran sus casos.

Por lo que se refiere a la tramitación procesal en sentido estricto, el programa informático de la gestión procesal debe contener, entre otros, los siguientes datos y trámites:

- Número de expediente
- Identificación de las partes actoras y demandadas
- Tipo de proceso
- Fecha de ingreso
- Fecha del acto o resolución recurrida
- Órgano del que procede el expediente o recurso
- Documentación adjunta al expediente o recurso
- Breve resumen de la acción o pretensión planteada
- Magistrado ponente
- Estado procesal en el que se encuentra el expediente o recurso (oficina, fecha de entrada, funcionario responsable, etc.)
- Todos los trámites procesales habidos (resoluciones; notificaciones; etc...)
- Fecha, resultado e incidencia de la votación
- Resolución dictada
- Notificaciones

Asimismo, y teniendo en cuenta la insuficiencia y escasez de equipos informáticos de los que dispone la Sala Constitucional, es necesario dotar a las distintas unidades integrantes de la oficina judicial de la Sala Constitucional de mejores medios materiales, en especial en lo relativo a la informática.

De otra parte, para la correcta y eficaz utilización por los distintos usuarios del nuevo programa informatizado de gestión procesal que pudiera implantarse, deberían programarse, en su caso, distintos cursos de formación,

aunque sean de corta duración, según el tipo de usuario de que se trate (Magistrados; Letrados y Asesores; Secretario; Relatores, y demás personal al servicio de la Sala).

B. Secretaría General

a) Creación del “Servicio de Doctrina Constitucional”

A fin de poder abordar la necesaria sistematización de la jurisprudencia constitucional, imprescindible para la creación de la base de datos jurisprudencial y para la publicación de la jurisprudencia constitucional, cualquiera que sea el medio en el que se haga, parece ineludible la creación y puesta en marcha de un servicio administrativo propio de la Sala Constitucional que se encargue de la recopilación, clasificación y publicación a la doctrina constitucional, todo ello sin perjuicio, claro está, de las competencias que al respecto tenga el CEDIJ y de los oportunos mecanismos de coordinación.

Se propone, a tal fin, que este servicio dependa de la Secretaría General de la Sala Constitucional y que su organización y funciones se regule en el Reglamento interno al que se refiere el art. 122 de la nueva Ley de Justicia Constitucional.

b) Reforzamiento del trámite de admisión

Como se expuso al tratar de la situación actual de la Secretaría y Oficina Judicial de la Sala Constitucional, recientemente se creó una plaza de “Asesor”, a quien le corresponde realizar el trámite de informe sobre la admisibilidad de los distintos recursos y expedientes, mediante la preparación de una nota de admisibilidad para el Magistrado ponente o la Sala y, para el caso que se proponga la inadmisión, del borrador de la pertinente resolución.

Se trata, sin duda, de un cambio importante en el funcionamiento de la Sala Constitucional que debería consolidarse en la estructura administrativa de la Secretaría de la Sala.

Asimismo, parece necesario su reforzamiento a corto plazo, pues se antoja insuficiente que esta función pueda desempeñarse correctamente por una única persona.

A tal fin, podría estudiarse la posibilidad de que los Relatores, cuya función principal consiste en la elaboración de los Antecedentes de las resoluciones, colaboraran en el trámite de admisión.

C. Biblioteca y servicios documentales

Se propone reforzar los servicios de biblioteca y documentación, mediante la adquisición de fondos bibliográficos, para dotar a la Biblioteca de la

Corte Suprema de una sección especializada básica en materia constitucional.

Para la adquisición de fondos documentales hay que contar con algunas dificultades en el sector de distribución editorial hondureño en las disciplinas jurídicas de derecho público en general y de derecho constitucional en particular y, en consecuencia, con la necesidad de realizar algunas adquisiciones fuera del país, lo que, previsiblemente, encarecerá su coste.

Por último, también sería aconsejable, en cuanto la modernización informática de la Sala Constitucional y de los servicios de biblioteca lo permitan, reforzar el área documental mediante la suscripción a bases de datos de legislación y jurisprudencia nacionales (si es que existen) y extranjeras, y orientar el acceso al documento vía internet, para así poder llegar a más destinatarios.

3. Programas de capacitación y formación en materia constitucional

Se constata la necesidad de llevar a cabo distintos cursos y seminarios en materia de capacitación y formación, tanto en el ámbito interno (Letrados y personal de la Sala de lo Constitucional) como en el ámbito externo de los operadores jurídicos (principalmente Abogados a través del Colegio de Abogados).

La formación y capacitación también debe dirigirse a los Magistrados integrantes de las distintas Cortes de Apelación y a los Jueces de Letras que conocen en primera instancia de algunos de los procesos constitucionales.

Los programas de capacitación y formación deberían, al menos, comprender las siguientes materias:

- Nueva Ley sobre la Justicia Constitucional.
- Procesos constitucionales.
- Jurisprudencia constitucional.
- Tratados internacionales y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
- Técnicas de motivación y resolución de casos (para Letrados y demás asesores de la Sala de lo Constitucional).

De otra parte, aprovechando la organización de estos cursos y programa de formación en materia constitucional y de justicia constitucional, podría estudiarse la viabilidad de hacer publicaciones en todos o algunos de

estos cursos, para así disponer en el futuro de textos y materiales que permitan una formación continua.

4. Desarrollo reglamentario de la Ley de Justicia Constitucional

La entrada en vigor de la nueva Ley de Justicia Constitucional obligará a su posterior desarrollo reglamentario.

Al respecto cabe precisar lo siguiente:

- El artículo 316 de la Constitución, al regular la Corte Suprema de Justicia y su distribución por Salas, entre ellas la Sala Constitucional, dispone que *“el Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de las salas”*. La entrada en vigor de la nueva Ley de Justicia Constitucional, que contiene una regulación distinta a la actual de los procesos constitucionales, exigirá adaptar el Reglamento a las previsiones legales.
- El artículo 122 de la nueva Ley sobre la Justicia Constitucional, por su parte, prevé la elaboración de un “reglamento interno” de la Sala Constitucional.
- Por último, las actuales Disposiciones de funcionamiento de la Sala Constitucional, aprobadas fecha 21 de marzo de 2002, obviamente no se acomodan a las nuevas previsiones legales y resulta del todo imprescindible su modificación.

En cuanto al desarrollo reglamentario, se sugiere, como primera opción, la conveniencia de proceder al estudio, preparación y aprobación de un Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Sala Constitucional, que regule con detalle tanto los aspectos administrativos y organizativos como los de funcionamiento jurisdiccional.

Para el caso de estimarse mejor separar los aspectos organizativos de los jurisdiccionales, habría que proceder a la elaboración y aprobación, de un lado, de unas nuevas Disposiciones de funcionamiento de la Sala Constitucional que sustituyan a las vigentes desde 2002, y, de otro, a la elaboración y aprobación del Reglamento interno al que se remite el artículo 122 de la nueva Ley de Justicia Constitucional.
